ción. Cualesquiera que fuesen sus preferencias ideológicas, los nuevos gobernantes de Chihuahua (y de México) tenían que asegurar su propia sobrevivencia en vista de las rebeliones periódicas. Si pudieron enfrentarse los retos a su autoridad fue porque se ganaron el apoyo de las clases populares mediante reformas, especialmente la redistribución de la tierra.

Este trabajo examina la política económica postrevolucionaria (1920-1929) de Chihuahua. Su objeto es comprender la evolución de la estructura de relaciones entre el nuevo régimen nacional, la flamante élite chihuahuense, los sectores más importantes de la economía estatal, y las clases populares. Enfoca tres sectores principales de la economía que afectaron en forma crítica lo político: dos áreas de importancia tradicional, tierra y minería; y una tercera, el juego, que adquirió importancia en la década de los veinte y proporcionó fondos al mundo político chihuahuense de un modo directo.

REFORMA AGRARIA

En ningún otro sector como en la tierra fue tan evidente el dilema del nuevo régimen. Con excepción de Francisco R. Almada, un maestro de primaria, todos los gobernadores del estado durante los 20 eran o se convirtieron en terratenientes; y como tales, tenían en alta estima el concepto de propiedad privada. Hasta el más radical defensor de la reforma agraria, Luis L. León, gobernador durante 1929 y 1930, se opuso con obstinación a la agricultura colectiva y su versión mexicana, el ejido.

Con todo, la agricultura en 1920 estaba en ruinas. Casi no quedaba ganado en las vastas llanuras de Chihuahua, los campos permanecían sin cultivar y los sistemas de irrigación no se empleaban. El capital y las bases necesarias para su recuperación se hallaban, al menos a corto plazo, en manos de los latifundistas, contra quienes habían luchado las masas revolucionarias. La respuesta de la nueva élite consistió en realizar la reforma agraria, en especial cuando la obligó la presencia amenazadora de Pancho Villa (hasta 1923), las grandes rebeliones (delahuertista en 1923-1924 y de Escobar en 1929), así como la necesidad de conservar los latifundios más productivos. Los aspectos cruciales de esta estrategia fueron la disposición a expropiar la tierra, incluso a los más poderosos terratenientes (extranjeros y nacionales)

cuando fuera necesario, y el poder recurrir a una gran cantidad de terrenos de propiedad del gobierno nacional. La mayor parte de estos últimos habían pertenecido a Luis Terrazas, fueron adquiridos por el presidente Alvaro Obregón en 1922, y administrados por la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura.[1]

Las condiciones en la hacienda Santa Gertrudis en 1921 ilustran la destrucción ocasionada por una década de guerra. Su casa principal estaba en ruinas, no tenían puertas pero se hallaba cubierta de serpientes de cascabel. Las cosechas habían desaparecido y los sembradíos eran lastimosamente pequeños; el sistema de irrigación estaba destruido. No quedaban más que seiscientos animales, que se encontraban a merced de lobos que parecían estar por donde quiera.[2]

Tres años de sequía y cosechas fallidas (en 1920, 1921 y 1922) exacerbaron el daño. Chihuahua tuvo que importar del resto de México para poder alimentarse; no fue sino hasta mediados de la década que las cosechas volvieron a normalizarse.[3] Algunos estimaron que el estado perdió hasta el 90 por ciento de su ganado durante la revolución.[4]

Los dirigentes necesitaban conservar el apoyo de las clases populares que habían soportado la carga más pesada de la revolución, mientras que a la vez debían fomentar un clima apto para que terratenientes locales y extranjeros invirtieran en la producción.

El impulso a la reforma agraria se inició durante el gobierno de Ignacio C. Enríquez, quien en 1921 aprobó dotaciones por más de 41 mil hectáreas para ocho pueblos y 1,500 cabezas de familia.[5]

También la impulsó la Ley estatal de Reforma Agraria en 1922 que, de acuerdo con el gobernador, tenía como propósito desintegrar los latifundios y crear pequeños propietarios.[6] Entre 1921 y 1924 Enríquez presidió la distribución de 429,317 hectáreas; sólo San Luis Potosí y Yucatán repartieron más tierras durante este período.[7] A pesar de la renuencia del gobierno nacional a expropiar propiedades de extranjeros mientras se negociaba el reconocimiento diplomático de los Estados Unidos, posesionarios chihuahuenses invadieron tierras de tres compañías norteamericanas, la Internacional Land and Live-stock Company (Hacienda de Corrales), la Cargill Land and Lumber Company, y la Chihuahua Lumber Company.[8] La Internacional Land and Lumber Company perdió 15 mil acres, incluyendo un importante abastecimiento de agua así como excelentes tierras en el valle ribereño de Villa López.[9]

Enríquez, al igual que Obregón, trató de guardar un equilibrio entre los ardientes reclamos reformistas y la necesidad de restaurar la agricultura (en el caso de Chihuahua, la ganadería). El gobernador favoreció la venta del latifundio Terrazas al empresario estadounidense Arthur Mc Quatters por estimar que estimularía la recuperación agrícola y aceleraría la distribución de tierras a pequeños propietarios. Obregón, tras aprobar inicialmente la transacción, se sometió a la enorme protesta popular contra la venta propuesta, y el gobierno federal adquirió la finca en 1922.[10] Enríquez, sin embargo, no siempre estuvo del lado de los grandes terratenientes: se enfrentó a la familia Zuloaga cuyas propiedades prerrevolucionarias eran inferiores sólo a las de Terrazas y al poder judicial federal cuando ordenó a colonos agrícolas encabezados por Guadalupe Gardea permanecer en tierras que ocupaban en la hacienda de Bustillos, hasta que el tribunal resolviera sobre su propiedad.[11]

Hubo quejas por parte de los agraristas. Octavio Santibáñez, secretario del Partido Nacional Agrarista,

CAPILLA ALFONSINA
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

protestó por la "obstrucción sistemática de las fuerzas rurales y guardias municipales contra la gente que se decide a ejercer sus reconocidos derechos a solicitar la restitución de sus ejidos". Declaró que el gobierno estatal era "inmoral" y que el nacional debería retirar al gobernador (Enríquez).[12] En efecto, por lo menos dos veces durante su mandato se utilizaron guardias rurales en contra de los agraristas. No obstante, los logros de Enríquez en cuanto a reforma agraria le permitieron reclutar un gran número de campesinos para combatir la rebelión de De la Huerta.[13] La revuelta no penetró en Chihuahua.

Los agraristas se impacientaron aún más con el avance de las reformas después que Enríquez dejó el cargo y Reinaldo Talavera lo sucedió, en 1924. Rómulo Alvelais, primero como secretario de Gobierno y más tarde como gerente de la Caja de Préstamos, que supervisaba las antiguas tierras de Terrazas, provocó singular ira. Los agraristas exigieron su destitución: lo consideraban hostil a sus intereses.[14] Un crítico dijo que el gobernador era "un enemigo abierto de la Revolución".[15] Talavera utilizó la fuerza en por lo menos una ocasión para desalojar agraristas de tierras que les habían sido concedidas por el gobierno nacional.[16] Evidentemente, al finalizar la amenaza de la rebelión delahuertista, no había necesidad urgente por una reforma extensa y prolongada.

Jesús Antonio Almeida, gobernador de 1924 hasta su deposición en 1927 mediante un golpe de estado, tomó el cargo con fuerte respaldo de colonos agraristas, ejidatarios y obreros, pero pronto se ganó la reputación de ser contrario a la reforma agraria.[17] Durante su mandato, Almeida y su familia se convirtieron en importantes propietarios de bosques maderables y, posteriormente, en significativos ganaderos.[18] Aunque no hubo amenazas de importancia al régimen revolucionario durante su truncado período, propició un considerable número de dotaciones. En 1926 el cónsul norteamericano en Chihuahua afirmó que la administración de Almeida concedía, al menos, un apoyo tácito a agraristas que invadían tierras para ganado: dichos ocupantes ilegales, con frecuencia, no eran desalojados.[19] Irónicamente, cuando Almeida se ausentó del cargo para irse de luna de miel con su nueva esposa, Susana Nesbitt Becerra (hija de una de las propietarias más ricas en el occidente de Chihuahua), el interino Jorge M. Cárdenas expropió 3,168 hectáreas a la familia de la novia.[20]

La política de Almeida tenía como preocupación fundamental proteger los derechos de la propiedad privada y mantener la fuerte recuperación económica que tuvo lugar a mediados de la década. Rechazó numerosas peticiones de restitución y dotación (muchas de sus resoluciones fueron revertidas por posteriores gobernantes). Almeida mantenía conexiones con no pocos de los hacendados más prominentes, y simpatizaba con ellos en lo ideológico. Aprobó el ardid de uno de sus amigos, Ian Benton, para hacer que su hacienda fuera declarada tierras nacionales, y se la intercambiara por otras de cualquier parte del estado.[21]

Hubo acusaciones en el sentido de que el gobernador había dado trato preferencial a la familia Terrazas por los impuestos atrasados que debía al estado.[22] En 1926 Almeida rechazó al menos tres importantes demandas de dotación en contra de importantes terratenientes.[23] Resulta más revelador, tal vez, el hecho de que en los pocos meses que siguieron a su deposición, cuarenta pueblos elevaron peticiones de tierra.[24] Es posible asimismo que hubiera usado las leyes agrarias para facilitar su apropiación de tierras madereras.[25]

Almeida, sin embargo, al igual que Enríquez, buscaba mantener el equilibrio entre las demandas populares y la necesidad de sostener la recuperación económica. En el caso de la Compañía Agrícola y Ganadera Palomas en 1926, anuló la resolución de la comisión agraria local y rechazó la petición de Puerta de Palomas y Vado de Fusiles. Pero luego ayudó a negociar un acuerdo entre los agraristas y Palomas, cuyas cláusulas establecían que la compañía debía vender al gobierno nacional varios miles de hectáreas que, a su vez, se entregarían a los peticionarios.[26] Almeida arregló también un convenio para que los residentes de Zaragoza, distrito de Hidalgo, obtuvieron derechos de aguas a cambio de reconocer a Federico Sisniega como propietario legítimo de la hacienda Bella Vista.[27]

Marcelo Caraveo, quien fue electo gobernador para 1928-1932, después que participara en el golpe que derrocó a Jesús Antonio Almeida, duró sólo cinco meses en el cargo: en marzo de 1929 se unió a la revuelta de Gonzalo Escobar contra Calles.

El último gobernador de la época, Luis León, era un latifundista que pensaba que el colectivismo era "antimexicano".[28] A raíz de la rebelión de Escobar, tuvo la "tarea verdaderamente abrumadora de desarmar a los guardias municipales y campesinos armados". Se quejó de que en los últimos meses de la administración Caraveo el estado cayó en manos de conservadores, capitalistas y latifundistas, quienes perseguían a obreros y campesinos. León acusó a todos aquellos que le habían precedido, y culpó a Enríquez y Almeida porque "predicaron la Revolución y nunca hicieron nada por ella". En junio de 1929, durante una convención de organizaciones obreras y campesinas, León propuso la organización del Partido Revolucionario Chihuahuense, compuesto por el antiguo Partido Liberal Progresista y el bloque radical de la legislatura estatal. Declaró que los principios de la Revolución no habían triunfado, ni en lo social ni en lo político; que no se había dado a la población rural la ayuda para obtener la tierra que los haría económicamente independientes; y que no se otorgaban a los obreros todos los derechos que las leyes estipulaban.[29]

León estructuró un plan de cuatro partes para agilizar la reforma agraria: incrementó el personal de la comisión agraria local, aumentó el número de empleados del departamento de agricultura para ayudar a elevar la producción de los ejidos y pequeños propietarios, estableció una Sección de Caminos para obras públicas, e invirtió más dinero en la educación pública.[30] León y el jefe de la comisión agraria, Carlos Terrazas, recorrieron personalmente el estado y escucharon las peticiones de la gente para que se restituyeran sus tierras.[31]

El cónsul norteamericano observó que, a diferencia de Caraveo, León parecía ser popular sólo entre las organizaciones de obreros y agraristas radicales, mientras ignoraba otras asociaciones por completo. Se mostró muy activo en cuanto a reforma agraria.[32]

León había llegado a Chihuahua para borrar los últimos vestigios de la insurrección de Escobar. No sólo el gobernador Caraveo se había puesto del lado de los rebeldes, sino también muchos miembros de la legislatura estatal así como los ayuntamientos de las dos ciudades más importantes, Ciudad Juárez y Chihuahua (lo que indica un considerable sentimiento en contra del régimen callista).[33] La efervescencia reformista por lo tanto, no era una mera coincidencia.

Si bien fue gobernador nominal durante diez meses, en realidad León desempeñó sus funciones la mitad de dicho tiempo: dejó el cargo en manos de

CAPILLA ALFONSINA
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Francisco R. Almada porque marchó fuera del estado para organizar el Partido Nacional Revolucionario. Cuando salió, hizo un llamado a sus oponentes, "los elementos capitalistas", para que aceptaran su derrota ante la Revolución. Si aceptaban las nuevas leyes, les ofrecía garantías y derechos; se unirían todos para trabajar por la reconstrucción del estado.[34] Formuló claramente de este modo una versión un tanto más radical del compromiso Obregón-Calles ante la reforma agraria.

Almada, reflejando en parte la constante necesidad de apoyar al campo chihuahuense (que se encontraba tambaleante como consecuencia de la reciente rebelión) y en parte, tal vez, sus preferencias ideológicas personales, resultó ser un reformista estridente. A fines del verano de 1929 envió una circular a los presidentes municipales en la cual indicaba haberse enterado de que algunos funcionarios locales se habían involucrado en las disputas entre terratenientes y agraristas que habían solicitado tierras, y que dichos funcionarios se habían convertido en instrumentos de los hacendados. Les advirtió que no se pusieran del lado de estos últimos: si tal práctica continuaba, los castigaría.[35] Durante su gobierno hubo un enorme aumento en el número de solicitantes de restitución y dotación de tierras. Almada afirmaba que, en consecuencia, la cantidad de tierras en cultivo se había elevado en forma espectacular.[36]

La política de ambos gobiernos el federal y el estatal, durante la década de 1920 de procurar el equilibrio entre las demandas populares de tierra, por un lado, y las preferencias ideológicas tanto como las necesidades prácticas de una recuperación agrícola por el otro, tuvo tal vez su mejor demostración en el destino del antiguo latifundio Terrazas. La familia Terrazas volvió a comprar a la Caja de Préstamos 500 mil

hectáreas, equivalentes a poco menos del veinte por ciento de la finca original. La cifra se aproximaba a la cantidad concedida a las colonias agrarias por la Caja de Préstamos. De los 2.7 millones de hectáreas originales, había 1.6 millones sin distribuir en 1930.[37]

Más ilustrativo aún de la naturaleza dual de la política agraria chihuahuense resultó el hecho de que varias de las fortunas postrevolucionarias de esa entidad estaban basadas en la adquisición de porciones de las tierras de Terrazas, vendidas por la Caja de Préstamos. Entre tales fortunas se encontraban las de Almeida, Bermúdez, Borunda, Carrillo, Quevedo y Russek.[38] Esas familias y el resurgente Terrazas encabezaron el renacimiento de la cría de ganado en el estado.

Las políticas mencionadas parecen haber conseguido parcialmente su propósito. Aunque las estadísticas son incompletas y las cifras a veces varían en forma considerable, la producción de cultivos básicos se recuperó entre 1923 y 1929, y el número de cabezas de ganado mostró un aumento notable.[39] La batalla por la reforma agraria, sin embargo, estaba en 1930 muy lejos de su fin.

CAPILLA ALFONSINA
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA